



Chile cierra un largo ciclo electoral

La gobernabilidad en juego

por Libio Pérez*

El superciclo electoral que inició el acuerdo constitucional como salida política a la crisis abierta por la rebelión de 2019 termina este año, cuando casi quince millones de votantes elijan a la o el presidente de Chile, se renueve la Cámara de Diputadas y Diputados, así como la mitad del Senado. El país hará frente a una encrucijada radical: dar continuidad al proceso democrático y a las transformaciones progresivas que permitan la correlación de fuerzas que se configure o se abra paso un proyecto regresivo que anuncie limitaciones a la democracia y a las libertades. Un proyecto que hoy tiene a lo menos tres candidaturas, ninguna de las cuales ofrece gobernabilidad democrática.

Foto: Vicente González Mimica



Paola Vezzani, *Playa del encuentro* (Acero y madera encontrada), 2025 (Exposición en Galería Patricia Ready a partir del 5 de junio)

de convenios con fundaciones o el uso de licencias médicas por parte de empleados públicos para añadir más días a sus vacaciones y viajar fuera del país.

La tercera amenaza es la regresión autoritaria que promueve la extrema derecha chilena, que no disimula su anclaje en el pasado dictatorial mientras copia los discursos de odio que emiten Trump, Milei, Bukele o Le Pen. Tanto Evelyn Matthei, como José Antonio Kast y Johannes Kaiser se proponen reducir el Estado, sacarlo aún más de su responsabilidad social y de garante de derechos, abrir más espacio al mercado, impulsar una política estrictamente punitivista para hacer frente a la delincuencia, poner armas en manos de civiles, reducir la democracia si es preciso para instalar un Estado policial con el pretexto del combate al crimen. Lo que ofrecen no es otra cosa una reconfi-

guración del Estado y su relación con la sociedad.

Ahí es donde radica la gobernabilidad democrática que, según Norberto Bobbio, es la capacidad del gobierno para procesar demandas de la sociedad y darle respuesta oportuna. La gobernabilidad es un concepto que tomó fuerza en los años 70, cuando el economista James O'Connor trabajó en un informe sobre la crisis que vivían países con pretéritas economías pujantes, pero que mostraban agotamiento de su expansión y una creciente conflictividad social. El rol del Estado, entonces, juega un papel preponderante en procesar la crisis, acoger demandas sociales y por esa vía dar paso a una gobernabilidad democrática, que incluye la participación ciudadana como un factor de legitimación democrática.

En los últimos años la gobernabilidad democrática en Chile ha sido puesta a prueba. El discurso y accionar populista de la opo-

sición de las derechas han apuntado hacia la figura del presidente de la República, piedra angular en el régimen presidencial en el equilibrio de poderes y en Estado de Derecho. El cerco ha sido tendido primero hacia algunos ministros amenazados reiteradamente de destitución a través de acusaciones constitucionales, pese a que la mayoría de ellas ni siquiera llegaron a ser cursadas. No importa, capturan la agenda pública y colocan al gobierno en una posición defensiva, obstaculizando su gestión, dañando la convivencia política, desgastando la confianza.

La maniobra más reciente se produjo con la actuación del fiscal que investigaba el bautizado "caso ProCultura", que buscó en dos oportunidades intervenir las comunicaciones del presidente a partir de interceptaciones ilegales. Resultó tan complejo manido el intento que las propias cortes de justicia desecharon la acción del fiscal, y el Ministerio Público terminó por sacar al fiscal del caso. Las derechas no solo reclamaron la improbable restitución del fiscal, sino además pidieron que el gobernante pusiera su teléfono a disposición de la justicia. El caso reflejó con intensidad qué tan poco importa la gobernabilidad y cómo ésta se pone en juego con tal de "desalojar" a las fuerzas que hoy gobiernan.

Las derechas chilenas atraviesan por un momento de alta tensión generado por la irrupción de los sectores más extremos, que tironean a la "derecha de la transición" en una lucha encarnizada por la hegemonía del sector. Fraccionada en tres candidaturas de competitividad relativa, afrontan un escenario en el que no pueden ofrecer gobernabilidad en el sentido más democrático del concepto. Al contrario, las fuerzas progresistas han conseguido articular un acuerdo y marco de competencia que se expresará en sus elecciones primarias del próximo 29 de junio. El desafío mayor para el oficialismo es la participación ciudadana, pilar fundamental para legitimar el proceso y colocar esta opción en una posición de fuerza con posibilidades de frenar el avance de la ultraderecha. La gobernabilidad democrática, con todas sus limitaciones, es una oferta de mayor calidad que un camino incierto y regresivo. ■

*Editor general de la edición chilena de *Le Monde Diplomatique*